

vienda. Es una medida que puede mejorar su bienestar y dar mayor tranquilidad en la vejez. Sin embargo, su costo fiscal no es menor, cerca de US\$200 millones anuales. Además, una fracción relevante del beneficio llegaría a personas que no necesariamente enfrentan dificultades económicas, ya que el pago de contribuciones se concentra en propiedades de mayor valor. A esto se suma el impacto en los ingresos municipales, que financian servicios esenciales, como seguridad, aseo y mantención de espacios públicos, junto con una menor contribución al Fondo Común Municipal, lo que podría afectar a comunas con menos recursos.

ALEJANDRO BRAVO

Agresiones

Los recientes episodios de violencia en colegios han encendido una alerta que no puede relativizarse. No es aceptable que docentes deban considerar su integridad física como parte del riesgo de ejercer su labor, ni que estudiantes se formen en entornos marcados por la agresión. La violencia en comunidades escolares no es un fenómeno aislado. Refleja tensiones sociales más amplias, pero se manifiesta con especial gravedad en espacios que deberían ser de protección. Por lo mismo, limitar la respuesta a medidas punitivas resulta insuficiente si no se aborda el problema de manera integral. Avanzar en el monitoreo sistemático del clima escolar y fortalecer instancias de reflexión dentro de las comunidades educativas puede contribuir a reconstruir la convivencia.

ANDRÉS JAIME ELÍAS

Más que gasto

La propuesta sobre acortar las carreras de pregrado abre un debate necesario. Al observar que en la mayoría de los países de la Océano de los grados académicos se estructuran en ciclos de tres a cuatro años, resulta evidente que Chile revise la extensión de sus programas. Sin embargo, una modernización de esta envergadura no puede reducirse a un mero recorte de semestres motivado por la urgencia presupuestaria. Si bien existe un componente económico ineludible, que afecta tanto el presupuesto de las familias como el gasto fiscal, la educación superior no puede ser analizada exclusivamente bajo la lógica del costo. El sistema universitario es, ante todo, el principal motor de movilidad social. Por

ello, cualquier ajuste debe tener como norte la excelencia y no la reducción por el simple hecho de recortar tiempos. Una reforma de este tipo debe realizarse caso a caso, resguardando con celo la calidad educativa, las prácticas profesionales y la especialización necesaria para el mundo laboral. Es cierto que existe espacio para corregir redundancias curriculares que hoy fatigan al sistema, pero debemos ser cautos: optimizar el tiempo formativo no debe significar sacrificar los elementos esenciales que garantizan una formación integral y de alto estándar.

FRANCISCO GALLEGOS

Políticas de juventud

Hace pocos días se informó sobre el recorte en servicios sociales, entre ellos el Instituto Nacional de la Juventud, donde solo quedará un reducido número de funcionarios en el país. Esta medida no solo implica una disminución administrativa, sino que un debilitamiento de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes. En la Región del Biobío contábamos con una destacada directora regional, referente no solo a nivel local, sino también nacional y sudamericano. Hablar de políticas públicas de juventud en Chile y en la región es hablar de Jimena Jorquera Fuentealba. Fue pionera en la creación del Departamento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción, labor que desempeñó por más de 20 años con un enfoque transversal y comprometido.

DANIEL MUÑOZ M.